

gaceta sindical

Suplemento

RESOLUCIONES DE LA COMISION DE GARANTIAS CONFEDERAL 1982-1984



CC.OO.

**INFORME DE LA COMISION DE
GARANTIAS CONFEDERAL AL
CONSEJO CONFEDERAL
DE LOS AÑOS 1982 A 1984**

Edita:

C. S. de CC.OO.
Comisión de Garantías

Madrid, septiembre de 1994

Realización:

Paralelo Edición, S. A.

RESOLUCIONES DE LA COMISION DE GARANTIAS CONFEDERAL 1982-1984

PRESENTACION

Desde la Tercera Comisión de Garantías Confederal que publicó por primera vez las Resoluciones que dictó en el período de su actuación entre 1984-1987, correspondiente al III Congreso Confederal, la Cuarta y Quinta Comisiones de Garantías Confederales han publicado anualmente en Suplementos de Gaceta Sindical los Informes presentados al Consejo Confederal, incluyendo las Resoluciones, Decisiones y Aclaraciones que adoptaron desde 1988 hasta 1993, ambos inclusive.

Las Resoluciones acordadas por la Segunda Comisión de Garantías Confederal, relativas a los años 1982, 1983 y 1984, no fueron publicadas, por cuyo motivo la práctica realizada posteriormente ocasionó un vacío, que con su publicación se elimina.

Conocidas las circunstancias descritas, la Quinta Comisión de Garantías Confederal en su reunión de 18 de marzo de 1994, acordó a la unanimidad publicar las Resoluciones de la Segunda Comisión de Garantías Confederal, correspondientes al II Congreso Confederal.

Madrid, 10 de mayo de 1994

Comisión de Garantías Confederal

RESOLUCIÓN SOBRE DIVERSAS SANCIONES EN LA RIOJA

RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA:

PRIMERO.—Que con ocasión de la sanción a varios dirigentes y afiliados de CC.OO. de La Rioja, la Dirección Provincial (DP) del Sindicato es convocada por varios afiliados para explicar en una Asamblea las causas de dichas expulsiones.

SEGUNDO.—Que la DP se opone expresamente a la celebración de dicha Asamblea por considerarla antiestatutaria y advierte de estos extremos a los convocantes de la misma.

TERCERO.—Que con fecha 12-11-1981, se celebra dicha Asamblea en los locales de la AISS y con posterioridad se hace público un comunicado de la misma.

CUARTO.—Que con fecha 13-11-1981, la DP abre expediente aclaratorio de los hechos y expulsa a 10 afiliados por participación clara en la convocatoria, organización y difusión de dicho acto.

QUINTO.—Que con fecha 29-11-1981, se publica en la prensa un comunicado firmado por 80 afiliados en contra de las citadas expulsiones y denunciando la política de la DP.

SEXTO.—Que con fecha 10-12-1981, se entrega a la DP unos pliegos de firmas en los que se denuncian las expulsiones. Dichos pliegos son enviados a la prensa.

SÉPTIMO.—Que con fecha 11-12-1981, salen a la luz nuevas cartas de protesta de la Sección Sindical de Jiménez Miguel y del Secretariado del Metal.

OCTAVO.—Que con fecha 12-12-1981, la DP decide expulsar a 31 afiliados y sancionar con suspensión de 6 meses a otros 49.

NOVENO.—Se comunica la decisión a los afectados el 29-12-1981 y se hace pública el 31-12-1981.

DÉCIMO.—Que se interpusieron los correspondientes recursos a la Comisión de Garantías de La Rioja, que no pudo resolver por estar disuelta.

UNDÉCIMO.—Que con fecha 23-1-1982, se envió a la Comisión de Garantía Confederal el correspondiente recurso.

CONSIDERANDO.—Que la situación en que se han producido los hechos puede calificarse objetivamente de excepcional, dado que el organigrama de CC.OO. en La Rioja estaba prácticamente descompuesto y en consecuencia se hizo necesario poner en marcha medidas extraordinarias, con el objeto de recomponer el Sindicato, para que éste se colocara en condiciones de cumplir sus objetivos, que no son otros que la defensa de los intereses de los trabajadores.

En este contexto, se producen determinadas expulsiones en las que esta Comisión de Garantías Confederal se ve imposibilitada de juzgar por qué dichos compañeros no han recurrido contra las mismas y que como consecuencia de estas expulsiones se producen unas determinadas actuaciones que hemos reflejado en los hechos probados y sobre cuyo contenido estatutario entraremos a valorar.

CONSIDERANDO.—Que la cuestión a debate se centra en el análisis sistemático de los Arts. 7.º y 8.º de los Estatutos, en los que se diferencia de forma explícita derechos y deberes u obligaciones de los afiliados.

A este respecto, creemos necesario subrayar que existen diferencias sustanciales entre los derechos individuales y colectivos de los afiliados, que es perfectamente estatutario que un afiliado a título individual exprese públicamente sus divergencias respecto a las decisiones

tomadas por el Sindicato, pero esto no es posible colectivamente salvo que nos encontremos ante una CORRIENTE SINDICAL cuya exigencia en el seno de CC.OO. deberá ser expresamente aprobada por un Congreso.

Asimismo, es evidente que todos los afiliados, dirigentes o no, a título individual o colectivo, están obligados a la aceptación, defensa y cumplimiento de las decisiones de los órganos en que se desarrolla su actividad, así como de los órganos superiores, incluso estando en desacuerdo con ellas, tal y como se establece en el Art. 8.º, c) de los Estatutos.

Por último, hay que destacar que los Estatutos garantizan la existencia de corrientes de opinión en el seno de CC.OO., pero dichas corrientes de opinión sólo tienen funcionalidad interna y habrán de ser tenidas en cuenta en la medida en que cuenten con el 10% de afiliados del ámbito correspondiente, pero en ningún caso podrán manifestarse externamente, porque ese derecho es prerrogativa única de la corriente sindical o de los afiliados individualmente.

CONSIDERANDO.—Que los Estatutos de la Confederación prohíben expresamente las corrientes organizadas, que son las que atentan contra la UNIDAD, PRINCIPIOS, ESTATUTOS Y PROGRAMA DE LA CONFEDERACIÓN, INCUMPLEN LAS DECISIONES TOMADAS EN LOS ÓRGANOS SUPERIORES, TIENE DISCIPLINA DE VOTO O PORTAVOCES EN EL SENO DE CC.OO.

CONSIDERANDO.—Que los compañeros expulsados y sancionados han participado de forma clara hasta el punto de ser reconocido por ellos en el recurso presentado ante esta Comisión, en dar iniciativas colectivas, que vulneran indudablemente los Estatutos de la Confederación.

En efecto, por una parte han participado en una Asamblea de afiliados convocada ajena a la Dirección existente y en la que originariamente se pretendía pedir explicaciones a la dirección, y ante la ausencia de ésta se condenaron las medidas tomadas por la misma y se hicieron públicas, lo que vulnera de forma tajante los Arts. 7.º d) 1 y 8.º, a) b), y c) de los Estatutos, dándose la circunstancia de que dichos compañeros podrían haberse opuesto orgánicamente a dichas decisiones, que de ser injustas habrían tenido el correspondiente coste político en el Congreso extraordinario, que necesariamente habría de celebrarse y que se celebró con posterioridad.

Asimismo, los compañeros firmantes de las cartas y pliegos de firmas entregados a la prensa vulneraron los Estatutos en los Arts. antes citados, dado que se expresaron públicamente y de forma colectiva contra acuerdos del órgano superior, sin ser una corriente sindical, única vía estatutaria posible para tales manifestaciones públicas tal y como se recoge en el Art. 7.º.

En consecuencia, creemos que la actuación de los compañeros sancionados y expulsados ha sido típicamente la propia de una corriente organizada en el seno de CC.OO. dado que han excedido los derechos reconocidos en los Estatutos y han olvidado obligaciones fundamentales como son la aceptación, defensa y cumplimiento de las decisiones tomadas por los órganos superiores, que aún admitiendo a efectos dialécticos, que fueran injustas o antiestatutarias, existen vías perfectamente abiertas en los Estatutos para defenderse contra las mismas.

Lo que no es admisible, en una organización de clase con un funcionamiento democrático, es lanzarse a actuaciones antiestatutarias que imposibilitan el funcionamiento democrático del Sindicato.

VISTOS.—Los Estatutos de la Confederación, excepto el plazo de Resolución.

FALLAMOS.—Que desestimamos el recurso presentado por los expulsados y sancionados y confirmamos en todos sus términos las sanciones impuestas.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN NO CABE RECURSO ALGUNO.

Por la Comisión de Garantías Confederal

Ricardo Bodas. Secretario

Carlos Elvira. Presidente

RESOLUCIÓN SOBRE SANCIÓN AL COMPAÑERO ERNESTO MARTÍN (FEDERACIÓN DEL METAL DE CC.OO.)

RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA:

PRIMERO.—Que el compañero Ernesto Martín forma parte de la Comisión Ejecutiva Provincial del Metal de Zaragoza, así como de la Comisión Ejecutiva de la Federación del Metal y de la Unión Provincial de Zaragoza de CC.OO.

SEGUNDO.—Que los días 10-6-1981 tuvo lugar una reunión entre la Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial y el Consejo Regional de Aragón, en la que se decidió afrontar la política del ANE.

TERCERO.—Que con fecha 11-6-1981, la Comisión Ejecutiva del Metal acordó asimismo apoyar el ANE.

CUARTO.—Que en todas estas reuniones el compañero Ernesto Martín se opuso a lo aprobado, quedando en minoría.

QUINTO.—Que con fecha 22-6-1981 en la Asamblea de delegados del Metal, convocada por el Secretariado Provincial de Zaragoza (Metal), con el objeto de poner en marcha en el sector el ANE, el compañero Ernesto Martín se opuso expresamente a la citada política del ANE.

SEXTO.—Que en dicha reunión Ernesto Martín llamó a los delegados presentes a no respetar el ANE y a desbordarlo. Asimismo con fecha 8-6-1981, Ernesto Martín difundió un escrito titulado «A todos los afiliados y afiliadas a CC.OO.» criticando la política seguida por CC.OO.

SÉPTIMO.—Que con fecha 1-7-1981, la Comisión Ejecutiva Provincial de Zaragoza propuso la sanción de expulsión de Ernesto Martín de la Confederación, por considerar que el citado compañero había incumplido el Art. 8.º, a, b, y c de los Estatutos de la Confederación.

OCTAVO.—Que con fecha 3-7-1981, se intentó tratar el tema en la Comisión Ejecutiva de la Federación del Metal de CC.OO. no siendo posible por encontrarse ausente Ernesto Martín y por no estar previsto el tema en el orden del día.

NOVENO.—Que con fecha 18-9-1981, la Comisión Ejecutiva de la Federación del Metal dictó Resolución en la que se expulsaba de la Confederación a Ernesto Martín por 18 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

DÉCIMO.—Que con fecha 29-9-1981, Ernesto Martín recurrió la citada Resolución ante la Comisión de Garantías de la Federación del Metal de CC.OO.

UNDÉCIMO.—Que con fecha 5-12-1981, la Comisión de Garantías de la FM/CC.OO. dictó Resolución confirmando la sanción.

DUODÉCIMO.—Que con fecha 27-1-1982 dicha Resolución fue recurrida por Ernesto Martín ante la Comisión de Garantías Confederal.

CONSIDERANDO.—Que la cuestión a debate se centra en el análisis sistemático de lo previsto en los Arts. 7, d) y 8, a) b) y c) de los Estatutos de la Confederación, dado que en dichas normas, que tratan de los derechos y deberes de los afiliados se consagra de forma explícita el derecho de todo afiliado a la libertad de expresión, incluso pública, así como a la manifestación de las eventuales discrepancias sobre LAS DECISIONES TOMADAS.

Asimismo, se consagra la obligación de todo afiliado al cumplimiento de los Estatutos, velar por la consecución de sus fines y objetivos de la Confederación, así como su puesta en práctica.

También consagran los Estatutos el deber de respetar y defender las decisiones democráticamente tomadas, tanto en el órgano propio como en el superior.

Cumplimiento de las decisiones de los órganos en que desarrolla su actividad, así como de

los órganos superiores, incluso estando en desacuerdo con ellas, tal y como se establece en el Art. 8.º, c) de los Estatutos.

Por último, hay que destacar que los Estatutos garantizan la existencia de corrientes de opinión en el seno de CC.OO., pero dichas corrientes de opinión sólo tienen funcionalidad interna y habrán de ser tenidas en cuenta en la medida en que cuenten con el 10% de afiliados del ámbito correspondiente, pero en ningún caso podrán manifestarse externamente, porque ese derecho es prerrogativa única de la corriente sindical o de los afiliados individualmente.

CONSIDERANDO.—Que los Estatutos de la Confederación prohíben expresamente las corrientes organizadas, que son las que atentan contra la UNIDAD, PRINCIPIOS, ESTATUTOS Y PROGRAMA DE LA CONFEDERACIÓN, INCUMPLEN LAS DECISIONES TOMADAS EN LOS ORGANOS SUPERIORES, TIENE DISCIPLINA DE VOTO O PORTAVOCES EN EL SENO DE CC.OO.

CONSIDERANDO.—Que los compañeros expulsados y sancionados han participado de forma clara hasta el punto de ser reconocido por ellos en el recurso presentado ante esta Comisión, en dar iniciativas colectivas, que vulneran indudablemente los Estatutos de la Confederación.

En efecto, por una parte han participado en una Asamblea de afiliados convocada ajenamente a la dirección existente y en la que originariamente se pretendía pedir explicaciones a la dirección, y ante la ausencia de ésta se condenaron las medidas tomadas por la misma y se hicieron públicas, lo que vulnera de forma tajante los Arts. 7.º, d) 1 y 8.º, a), b) y c) de los Estatutos, dándose la circunstancia de que dichos compañeros podrían haberse opuesto orgánicamente a dichas decisiones, que de ser injustas habrían tenido el correspondiente coste político en el Congreso Extraordinario, que necesariamente habría de celebrarse y que se celebró con posterioridad.

Asimismo, los compañeros firmantes de las cartas y pliegos de firmas entregados a la prensa vulneraron los Estatutos en los Arts. antes citados, dado que se expresaron públicamente, sin ser una corriente sindical, única vía estatutaria posible para tales manifestaciones públicas tal y como se recoge en el Art. 7.º.

En consecuencia, creemos que la actuación de los compañeros sancionados y expulsados ha sido típicamente la propia de una corriente organizada en el seno de CC.OO. dado que han excedido los derechos reconocidos en los Estatutos y han olvidado obligaciones fundamentales como son la aceptación, defensa y cumplimiento de las decisiones tomadas por los órganos superiores, que aún admitiendo, a efectos dialécticos, que fueran injustas o antiestatutarias, existen vías perfectamente abiertas en los Estatutos para defenderse contra las mismas.

Lo que no es admisible en una organización de clase con un funcionamiento democrático, es lanzarse a actuaciones antiestatutarias que imposibilitan el funcionamiento democrático del Sindicato.

VISTOS.—Los Estatutos de la Confederación, excepto el plazo de Resolución.

FALLAMOS.—Que desestimamos el recurso presentado por los expulsados y sancionados y confirmamos en todos sus términos las sanciones impuestas.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN NO CABE RECURSO ALGUNO.

Madrid, 16 de julio de 1982

Por la Comisión de Garantías Confederal

Ricardo Bodas. Secretario
Carlos Elvira. Presidente

RESOLUCIÓN SOBRE EXPEDIENTE DE SANCIONES EN LA UP DE SEVILLA

RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA:

PRIMERO.—Que con fecha 8 de septiembre de 1981, tuvo lugar en los locales de O'Donell una reunión no convocada por ninguna estructura de la Unión y a la que asistieron un grupo de afiliados al sindicato junto con un abogado y varios miembros de la Comisión Ejecutiva entre ellos Jaime Baena; J. M. Castillo; F. Serrano; J. M. Calado; Carlos González; P. Andrés González; Rafael Domínguez y Manuel Guerra.

SEGUNDO.—Que en dicha reunión se aprobó un documento titulado «Consideraciones sobre la Unión Provincial» cuyo contenido no puede considerarse contrario a la política general de CC.OO. si bien manifiesta determinadas críticas contra su aplicación por la Unión Provincial de Sevilla. Críticas que la propia resolución de la Comisión Ejecutiva de la COAN considera juicios y valoraciones perfectamente legítimos, si bien expuestos por un cauce incorrecto por no ser orgánico.

TERCERO.—Que en la tramitación del presente expediente no se ha acreditado el grado de difusión del citado documento.

CUARTO.—Que los también miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial F. Acosta y A. R. Torrijos intentaron incorporarse a la reunión lo que les fue expresamente impedido.

QUINTO.—Que no se ha acreditado que su actuación atentase contra la unidad, principios, estatutos y programas de la Confederación, ni que existiere disciplina de voto o portavoces en los órganos a los que pertenecen.

SEXTO.—Que en su reunión de fecha 29-9-1981, la Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial de Sevilla aprobó por 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención, sancionar a los participantes en dicha reunión a una suspensión de dos meses en sus funciones.

SÉPTIMO.—Que con fecha 5-10-1981, el Consejo Provincial de Sevilla confirmó la sanción por 37 votos a favor, 33 en contra y una abstención.

OCTAVO.—Que recurrida la sanción, la misma fue confirmada por la Comisión Ejecutiva de la COAN, en su resolución de fecha 25-11-1981.

NOVENO.—Que los sancionados interpusieron recurso ante la Comisión de Garantías Confederal, dado que la COAN carece de Comisión de Garantías propia.

CONSIDERANDO.—Que la cuestión a debate, atendidos los argumentos de recurrentes y recurridos se centra en determinar de forma expresa el contenido del Art. 7.º de los vigentes Estatutos aprobados en el II Congreso de la Confederación que, en nuestro entender, contiene los siguientes supuestos en relación con las corrientes dentro de la Confederación.

A) Aunque con deficiente sistemática, dado que no diferencia las situaciones individuales de las colectivas, el Art. 7.º, d) apartado 2.º contemple la posible existencia de corrientes sindicales en CC.OO. que deberán estar sometidas a determinadas condiciones que enumera en los cinco números siguientes.

En consecuencia, son perfectamente admisibles en CC.OO. las corrientes sindicales que cumplen los citados requisitos.

Por el contrario, todas las corrientes que incumplan alguno de ellos y en consecuencia estén organizadas como tales, constituyan las estructuras paralelas, atenten contra la unidad, principios, estatuto y programa de CC.OO. están rigurosamente prohibidas.

B) Por otra parte, el apartado d) del Art. 7.º subapartado tercero contempla las llamadas corrientes de opinión que por su propia naturaleza son las que se nuclean en torno a cuestiones

concretas y que deben ser tenidas en cuenta en la medida en que cuenten con el 10% de afiliados en el ámbito correspondiente.

CONSIDERANDO.—Que de los hechos declarados se desprende con claridad que la actuación de los sancionados no ha pretendido en forma alguna constituirse en corriente sindical de las contempladas en el Art. 7.º, d) apartado 2.º.

Asimismo, no se ha acreditado que su conducta pretendiera constituirse en corriente organizada, ni que haya actuado como tal o haya vulnerado alguno de los apartados del Art. 7.º, d) subapartado 2.º de los Estatutos de la Confederación.

Por el contrario, entendemos que los sancionados han intentado actuar como una corriente de opinión ante determinados temas puntuales, que en su opinión afectaban al sindicato en su ámbito de actuación y, naturalmente, para constituir una corriente de opinión es necesario reunirse, porque en caso contrario sería imposible su constitución y un absurdo que tal posibilidad se contemple en nuestros Estatutos.

En consecuencia, entendemos que la conducta de los sancionados es estatutaria, sin perjuicio de tener conciencia, que la existencia de corrientes de opinión genera tensiones en la vida sindical, pero dichas tensiones obedecen al carácter pluralista y democrático del sindicalismo que hemos elegido, que no es más potente y más atractivo por unilateral y monolítico, sino todo lo contrario, y el arte de la dirección y de la eficacia del Sindicato exige la máxima capacidad de interpretar y recoger las diversas opiniones que existen en el seno del mismo, si en verdad queremos un sindicalismo de nuevo tipo.

VISTOS.—Los Estatutos de la Confederación, con excepción del plazo para dictar la presente Resolución.

FALLAMOS.—Que admitiendo como admitimos el recurso, declaramos nulas y sin efecto las sanciones impuestas por el Consejo Provincial de Sevilla y la Comisión Ejecutiva de la COAN.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN NO CABE RECURSO ALGUNO.

Madrid, 10 de noviembre de 1982

Por la Comisión de Garantías Confederal

Ricardo Bodas. Secretario
Carlos Elvira. Presidente

RESOLUCIÓN SOBRE RECURSO CONTRA ELECCIONES EN EL SEGUNDO CONGRESO DE LA FEDERACIÓN ESTATAL DE SEGUROS DE CC.OO.

RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA:

PRIMERO.—Que con fecha 5 al 7 de junio de 1981, se celebró el II Congreso de la Federación Estatal de Seguros de CC.OO.

SEGUNDO.—Que ante la Comisión de candidaturas del citado Congreso se presentó una candidatura encabezada por el compañero Manuel Pérez, que contaba con más del 10% de los delegados al Congreso.

TERCERO.—Que dicha candidatura fue rechazada por la Comisión de candidaturas en aplicación de la ponencia de organización, que estaba a debate en el citado Congreso y posteriormente fue aprobada.

CUARTO.—Que los miembros de la candidatura rechazada, interpusieron recurso ante la Comisión de Garantías de la Federación Estatal de Seguros, que les fue rechazado.

QUINTO.—Que, asimismo, interpusieron recurso ante la Comisión de Garantías Confederal.

SEXTO.—Que la Comisión de Garantías Confederal acordó proponer una conciliación a las partes, con fecha 23-3-1982.

SÉPTIMO.—Que dicha propuesta fue aprobada básicamente por los recurrentes, sin que los recurridos hayan contestado hasta la fecha.

CONSIDERANDO.—Que en la fecha de celebración del II Congreso de la F. E. de Seguros estaban plenamente vigentes los Estatutos del I Congreso de la Confederación, que en el apartado b) del Art. 7.º dicen textualmente «...en los casos en que se presente más de una candidatura se seguirá el sistema proporcional. Sólo se admitirán aquellas listas de candidatos presentados al menos por el 10% de los afiliados en el momento correspondiente a la elección».

Que dándose la circunstancia de que la candidatura encabezada por Manuel Pérez contaba con el 10% de los delegados, tenía pleno derecho a participar en la elección a la Comisión Ejecutiva, siendo absolutamente incorrecta y antiestatutaria la decisión de la Comisión de Candidaturas, que aplicó la ponencia de organización presentada al Congreso, que, pese a su aprobación posterior, estaba en contradicción con los Estatutos del 1.º y 2.º Congreso de la Confederación, así como sus principios y política general, que siempre se ha basado en el apoyo al sistema proporcional, así como en la garantía y defensa de las minorías.

CONSIDERANDO.—Que esta Comisión ha procurado que ambas partes acercaran sus posiciones, equilibrando intereses, dada la situación de la Federación y, por ello inauguráramos un estilo de conciliación, que supera las crispaciones, dándose la circunstancia de que por la dirección de la Federación de Seguros ni tan siquiera ha contestado a nuestra proposición.

VISTOS los Estatutos de la Confederación, excepto los plazos para dictar esta Resolución.

FALLAMOS, que estimando como estimamos el recurso interpuesto por Manuel Pérez y

otros, declaramos NULA y sin efecto la decisión de la Comisión de Candidaturas del II Congreso de la Federación de Seguros de CC.OO. y en consecuencia declaramos perfectamente válida la candidatura encabezada por Manuel Pérez y otros.

Madrid, 21 de febrero de 1983

Por la Comisión de Garantías Confederal

Carlos Elvira. Presidente

RESOLUCIÓN SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CATALUÑA DE CC.OO.

RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA:

PRIMERO.—Que con fecha 22 de mayo de 1982, la Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de CC.OO. acordó la creación de una agrupación electoral, que debería registrarse jurídicamente como organización sindical.

SEGUNDO.—Que dicha decisión fue ratificada por el Consejo de la Federación con fecha 10-10-1982.

TERCERO.—Que dichas resoluciones fueron ratificadas, asimismo, por el Consejo Confederal de CC.OO. el 7-11-1982.

CUARTO.—Que con fecha 2-7-1982, el Consell de la Federació d'Ensenyament de CC.OO. de Catalunya decidió no legalizar la autodicha Agrupación electoral, así como recurrir a la Comisión de Garantías.

QUINTO.—Que con fecha 13 de noviembre de 1982, la Comisión de Garantías de la Federación de Enseñanza de CC.OO. desestimó el recurso, en términos que se dan por reproducidos.

SEXTO.—Que asimismo, la Secretaría General de la Federación de Cataluña de CC.OO. interpuso recurso ante esta Comisión de Garantías, con fecha 13-8-1982.

CONSIDERANDO, que el Art. 24 de los Estatutos de la Confederación establece inequívocamente las funciones de esta Comisión, en el sentido de entender sobre actuaciones que vulneran los Estatutos de la Confederación, así como medidas disciplinarias de carácter estrictamente sindical, parece evidente que del conjunto de la prueba practicada no se desprende en forma alguna vulneración de los Estatutos de la Confederación de la CONC, o de la Federación de Enseñanza, hasta el punto de que los propios recurrentes no citen norma alguna, que consideren vulnerada.

En consecuencia, esta Comisión, sin valorar la corrección o incorrección político-sindical de la medida tomada, entiende que la misma es plenamente Estatutaria y se alinea de forma clara con los principios contenidos en nuestros Estatutos.

VISTOS.—Los Estatutos de la Confederación, con excepción del plazo para dictar la presente Resolución.

FALLAMOS.—Que desestimamos en todos sus términos el Recurso interpuesto por la Federación d'Ensenyament de Catalunya de CC.OO.

Madrid, 21 de febrero de 1983

Por la Comisión de Garantías Confederal

Carlos Elvira. Presidente

RESOLUCIÓN SOBRE SANCIÓN AL COMPAÑERO RAFAEL ARÉVALO

RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA:

PRIMERO.—Que Rafael Arévalo en reunión de la Ejecutiva Provincial de Hostelería de Málaga imputó malversación de fondos y calificó de ladrón al compañero de organización.

SEGUNDO.—Que con fecha 18-6-1982, se celebró una reunión del Consejo Provincial de Hostelería, en cuyo orden del día no estaba previsto ningún expediente sancionador.

TERCERO.—Que pese a lo antedicho, en la citada reunión el Secretario General pidió explicaciones sobre las citadas imputaciones a Rafael Arévalo, que se levantó y abandonó la reunión.

CUARTO.—Que inmediatamente se puso a votación la expulsión del aludido decidiéndose por unanimidad.

QUINTO.—Que dicha decisión fue comunicada al interesado con fecha 28-6-1982, remitiéndose las pertinentes copias a la COAN y a la Federación de Hostelería.

SEXTO.—Que con fecha 22-7-1982, Rafael Arévalo interpuso recurso ante esta Comisión de Garantías, que con fecha 20-10-1982 fue remitido a la otra parte, que nos envió la pertinente documentación con fecha 16-5-1983.

CONSIDERANDO.—Que la Comisión de Garantías Confederal, como órgano de la Confederación responsable de las reclamaciones de los miembros u órganos de la misma, está obligada a conocer de los hechos imputados en cada supuesto planteado, así como de la justa aplicación de los Estatutos de la Confederación a los mismos, y en consecuencia nos parece importante diferenciar ambas cuestiones.

En primer lugar, tenemos que considerar que los hechos imputados al compañero Arévalo deben reputarse de graves, en la medida en que acusar a otro compañero de malversación de fondos y calificarle como ladrón, aún en el seno de un órgano de la Confederación, dada la gran trascendencia que puede tener para el afectado, no puede realizarse sin aportar pruebas suficientes de las que racionalmente se desprenda lo antedicho porque en caso contrario la tensión llegaría a extremos insostenibles personalizando la actividad sindical y bloqueando las funciones del órgano correspondiente.

En consecuencia dicha actitud al atentar gravemente contra la fama de un miembro del Sindicato, se hace sin duda merecedora de la apertura del correspondiente expediente disciplinario.

Ahora bien, subrayamos, merecedora de la apertura del correspondiente expediente disciplinario que necesariamente debe cumplir todos y cada uno de los derechos que el sancionado tenga reconocidos en los Estatutos, y en consecuencia instrucción por el órgano en que milita, lo que no se ha cumplido en este supuesto, y toma de decisión por el órgano inmediatamente superior CON AUDIENCIA DEL INTERESADO, lo que no se ha cumplido con las garantías precisas.

En efecto, la sanción impuesta a Rafael Arévalo está viciada de nulidad en tanto no se tramitó por el órgano en que militaba y, sobre todo, al no permitirle una defensa suficiente, al decidir su expulsión en una reunión en la que no estaba previsto entender sobre el tema y sin permitirle la audiencia prevista en el Art. 9/1 de los Estatutos.

Por tanto, esta Comisión de Garantías Confederal, si bien entiende que los hechos imputados a Rafael Arévalo eran merecedores de expediente disciplinario, en el que se hubiera determinado su certidud o no, así como los posibles atenuantes o agravantes, que pudieran concurrir, no puede admitir como válido el procedimiento sancionador seguido, porque creemos un bien

más protegible para la Confederación, el respeto de los Estatutos por TODOS, como máxima garantía de democracia interna, que la sanción de unos hechos punibles, sin respeto de dichas garantías, que nos llevaría a una manifiesta crisis de credibilidad como organización democrática al generar indefensión al afectado.

Asimismo, queremos llamar la atención a los órganos responsables del presente expediente sancionador, que la tardanza de once meses en aportar la documentación precisa para la presente resolución supone también una forma de sancionar, puesto que el afectado ha permanecido expulsado del Sindicato durante un tiempo desproporcionado, bloqueándose la acción de los órganos competentes sobre la justeza de dicha expulsión, lo que vacía de contenido la acción de esta Comisión, puesto que una justicia lenta no es justicia.

VISTOS los Estatutos de la Confederación, excepto los plazos para resolver,

FALLAMOS.—Que estimando el recurso de Rafael Arévalo, procede declarar nula la sanción impuesta por el Consejo Provincial de Hostelería de Málaga, dejando sin efecto la expulsión que afectó al recurrente.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN NO CABE RECURSO ALGUNO.

Madrid, 21 de mayo de 1983

Por la Comisión de Garantías Confederal

Ricardo Bodas. Secretario
Carlos Elvira. Presidente

RESOLUCIÓN SOBRE SANCIÓN AL COMPAÑERO MIGUEL CIHUELO

RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA:

PRIMERO.—Que el compañero Cihuelo participó y encabezó un candidatura llamada «unitaria» marginando la confección de una candidatura de CC.OO. a pesar de la postura contraria de la Sección Sindical de la empresa Balay.

SEGUNDO.—Asimismo, el citado compañero ha antepuesto y defendido públicamente las posturas de la Asamblea de trabajadores de su planta, en contraposición con las posiciones de la Sección Sindical de CC.OO. durante la negociación del Convenio Colectivo de Balay.

TERCERO.—Por los anteriores hechos, el mencionado compañero fue sancionado con expulsión por la Sección Sindical de CC.OO. de Balay.

CUARTO.—Que con fecha 3-12-1982, la Comisión Ejecutiva del Metal de Zaragoza, en reunión convocada al efecto, con audiencia del interesado, que realizó las alegaciones correspondientes, presentando la documentación oportuna, propuso al Consejo de Rama la suspensión de hasta tres meses en la Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical de Balay.

QUINTO.—Con fecha 31-1-1982, el afectado interpuso recurso ante la Comisión de Garantías de la Federación del Metal, que con fecha 5-3-1983 resolvió confirmando la sanción impuesta.

SEXTO.—Que con fecha 4-4-1983, Miguel Cihuelo interpuso recurso ante esta Comisión de Garantías.

CONSIDERANDO.—Que de los hechos declarados probados se desprende que la conducta de Miguel Cihuelo es notoriamente contraria a lo previsto en los apartados a), b) y d) del Art. 8 de los Estatutos de la Confederación, en tanto en cuanto ha venido practicando una política contraria a la decidida por el pertinente órgano de CC.OO., en temas tan importantes como las elecciones sindicales, o la negociación del Convenio de su empresa.

Reiteradamente, el compañero Cihuelo viene justificando su conducta en la postura de la Asamblea de su planta, olvidando que el Sindicato es una organización y como tal debe garantizar como condición indispensable para el logro de sus fines la UNIDAD DE ACCION, y para ello es preciso respetar y poner en práctica las decisiones de los órganos correspondientes y si los mismos entran en contradicción con las decisiones asamblearias, es preciso acatarlas y defenderlos sin perjuicio del derecho inexcusable de todo afiliado de intentar corregir las posturas de CC.OO., que puedan ser incorrectas o no asumibles por los trabajadores, en el seno de las propias CC.OO.

Por tanto, entendemos que la posición de Miguel Cihuelo ha vulnerado claramente los Estatutos de la Confederación, siendo procedente la sanción impuesta.

Al respecto, esta Comisión quiere subrayar el rigor formal del órgano sancionador, que ha garantizado plenamente los derechos del compañero afectado, atemperando muy ajustadamente la sanción impuesta, que guarda equilibrio con los hechos probados y rompe con una cierta tradición de expulsiones, que sólo deben admitirse en situaciones extremas.

Asimismo, destacamos la justa advertencia de la Comisión Ejecutiva del Metal a la Sección Sindical de Balay, por expulsar unilateralmente al compañero Cihuelo, sin respeto de los Estatutos.

VISTOS los Estatutos de la Confederación.

FALLAMOS.—Que desestimando el recurso formulado por el compañero Miguel Cihuelo venimos a confirmar la sanción impuesta por la Comisión Ejecutiva del Metal de Zaragoza.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN NO CABE RECURSO ALGUNO.

Madrid, 21 de mayo de 1983

Por la Comisión de Garantías Confederal

Ricardo Bodas. Secretario
Carlos Elvira. Presidente

RESOLUCIÓN SOBRE IMPUGNACIÓN PRESENTADA POR LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL SINDICATO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE MADRID

RESULTANDO PROBADO:

1.º.—Con fecha 26 y 27 de marzo de 1983, se celebró en Madrid el Primer Congreso del Sindicato de Actividades Diversas de Madrid.

2.º.—Que al comienzo del Congreso el compañero Agapito Bachiller por sí y en nombre de otros compañeros manifestó su intención de impugnar el Congreso ante la Comisión de Garantías por las siguientes razones:

A) No haber sido respetado en las normas organizativas del Congreso, los acuerdos de fusión de Limpiezas en el Sindicato de Actividades Diversas.

B) Elección indebida de delegados al Consejo y Congreso, fusionando indebidamente dos Secciones Sindicales distintas, infringiendo el Art. 23 de los Estatutos.

C) Por exclusión de algunos miembros del Consejo del Sindicato en la preparación del Congreso.

3.º.—Con posterioridad, el mismo delegado solicitó que se contaran los delegados al Congreso y ante la negativa de la presidencia de la mesa, en unión de otros delegados abandonó el Congreso.

4.º.—Se constata que anteriormente a la antedicha petición se había votado y, en consecuencia, era notorio el número de asistentes máxime si se tiene en cuenta el escaso número de participantes.

5.º.—Que el Congreso fue impugnado ante la Comisión de Garantías de la UR de Madrid mediante documento que se adjunta y que se da por reproducido (n.º 1).

6.º.—Dicha impugnación fue protestada por la Ejecutiva Provincial en documento que se adjunta y que se da por reproducido (n.º 2).

7.º.—La Comisión de Garantías de la U.R. de CC.OO. de Madrid dictó Resolución el 17-6-1983, que se adjunta y se da por reproducida (n.º 3).

8.º.—Que dicha Resolución fue impugnada ante esta Comisión de Garantías Confederal por la Comisión Ejecutiva del Sindicato de Actividades Diversas el 1-8-1983 y que asimismo se da por reproducida y se adjunta (n.º 4).

9.º.—Que la Ejecutiva y el Consejo de Actividades Diversas que convocó el Congreso impugnado estableció sus normas y aprobó sus ponencias, se convocaron legítimamente, estando citados por correo todos sus miembros.

10.º.—Que es significativo subrayar que la compañera Paloma Aguilar, anteriormente responsable de Formación Sindical, fue convocada para redactar la ponencia del área de su responsabilidad, negando su colaboración.

11.º.—Que no obstante, los compañeros impugnantes participaron en la Asamblea Congresual de Limpiezas, sin impugnar el proceso congresual por su supuesta falta de participación en los órganos convocantes.

12.º.—Que la Sección Sindical del Impecable se ha reunido generalmente como una sola Sección Sindical y no en dos, como manifiestan los impugnantes.

13.º.—Que en los días del Congreso asistieron aproximadamente 70 delegados.

14.º.—Que en los dos días del Congreso no asistió al mismo ningún miembro de la dirección del Sindicato.

CONSIDERANDO.—Que de los hechos declarados probados se acredita sin ningún género de dudas para esta Comisión, los siguientes puntos fundamentales:

a) Que el Congreso fue convocado legítimamente por los órganos competentes según nuestros Estatutos, es decir, Ejecutiva y Consejo de Actividades Diversas.

b) Que los miembros de la Ejecutiva y Consejo impugnantes fueron debidamente convocados, lo que se resalta con nitidez en la medida en que quien acusa es quien debe probar y dándose la circunstancia doble, de que por dichos compañeros no manifestaran oposición alguna a la Ejecutiva y al Consejo, sobre su supuesta exclusión e incluso participaron en la Asamblea Congresual de Limpiezas, sin manifestar protesta al respecto, es evidente que no han probado, sino todo lo contrario, la exclusión que imputan.

c) Que la Ejecutiva y el Consejo estaban perfectamente legitimados para establecer las normas del Congreso, que solamente pueden ser censuradas por el Congreso mismo y, en consecuencia, dichos órganos estaban facultados para modificar los acuerdos de fusión de Limpiezas a Actividades Diversas, y si los impugnantes estaban en desacuerdo deberían haberlo planteado al Congreso que era soberano respecto a la impugnación, cosa que no se realizó.

d) Que es incierto que las Secciones Sindicales del Impecable Industrial e Impecable, S. A. fueran dos, dado que según acta de fecha 28-1-1983 se tomó la decisión de que las reuniones y las decisiones se harían conjuntamente.

En consecuencia no se ha producido vulneración alguna del Art. 23 de los Estatutos.

e) Que esta Comisión considera probado sin ningún género de dudas dado que poseemos la cinta magnetofónica aportada por el compañero Bachiller que éste no impugnó el Congreso ante el propio Congreso, que era soberano para resolver todos los problemas planteados por el propio Bachiller, sino que manifestó su intención de impugnarlo ante la Comisión de Garantías y en consecuencia la mesa actuó correctamente.

f) Que es cierto que la mesa se negó a contar los delegados a petición de Bachiller, pero no es menos cierto que se había votado con anterioridad y era notoriamente conocido el número de delegados asistentes y aunque sea censurable la actitud de la mesa, en ningún caso fundamenta la impugnación del Congreso y menos la retirada en masa del mismo.

CONSIDERANDO.—Que las Comisiones de Garantías de la Confederación en cualquiera de sus ámbitos, están vinculadas por el Art. 24 de los Estatutos, con una finalidad estricta, que consiste en garantizar el cumplimiento de los Estatutos y en ningún caso convertirse en una segunda dirección del Sindicato.

Por ello, queremos destacar que la situación del Sindicato de Actividades Diversas de Madrid, según se desprende de los hechos más arriba probados, atraviesa un momento difícil, lo que exige una especial atención de los órganos competentes para hacer frente a una problemática que, abandonada a su propio impulso, puede tener graves consecuencias para el futuro de un Sindicato joven, que debe avanzar hacia una mayor y firme unidad y no hacia todo lo contrario y parece evidente, que es difícil cumplir dicho objetivo sin asistir a un Congreso, máxima expresión de la participación de los afiliados en la vida del Sindicato, ningún miembro de la Dirección.

CONSIDERANDO.—Que el problema planteado no es problema de Estatutos sino un problema político y organizativo y como tal debe ser tratado para evitar que haya vencedores y vencidos y garantizar la unidad y en consecuencia la eficacia del Sindicato.

VISTOS.—Los Estatutos de la Confederación y el Reglamento de esta Comisión de Garantías Confederal.

FALLAMOS.—Que estimando como estimamos el recurso interpuesto por la C. E. Provincial de AA. DD., anulamos la Resolución de la Comisión de Garantías de la U.R. de Madrid de fecha 17-6-1983 y, en consecuencia, declaramos que el Congreso impugnado es perfectamente estatutario, en cuanto a su convocatoria y desarrollo, no correspondiendo a esta Comisión de Garantías valorar su eficacia política.

Madrid, 26 de septiembre de 1983

Por la Comisión de Garantías Confederal

Ricardo Bodas. Secretario

Carlos Elvira. Presidente

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS CONFEDERAL SOBRE DENUNCIA DE LA FEDERACIÓN ESTATAL DE CC.OO. DEL CAMPO, CONTRA LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE CC.OO. DEL CAMPO

RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA:

PRIMERO.—Que el IV Congreso de la Federación Andaluza de CC.OO. del Campo aprobó en sus Estatutos los siguientes Artículos:

a) Artículo 2, segundo párrafo.

«Los presentes Estatutos serán válidos en tanto en cuanto no contravenga a los de aquéllos, (se refiere a la COAN y a la Federación Estatal del Campo), sin embargo, se pueden establecer acuerdos cuando uno o algunos de los Artículos sean diferentes».

b) Artículo 6, AMBITO PROFESIONAL, último párrafo.

«Así como los pensionistas y jubilados de la seguridad social agraria».

c) Artículo 11 DERECHOS DE LOS AFILIADOS, último párrafo apartado a).

«En ambos casos, las listas serán abiertas».

d) Artículo 17, Sobre los órganos de dirección, apartado d).

«Secretario General y Secretario Adjunto».

e) Artículo 18, números 5 y 10.

«Elegir el Secretario General y el Secretario General Adjunto.

«Reconocer el carácter de corriente sindical interna».

f) Artículo 19, último párrafo.

«El Consejo Sindical elegirá entre sí una Presidencia... Esta Presidencia será de cinco miembros. Un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios».

g) Artículo 20, último párrafo.

«La Ejecutiva Federal elegirá entre sus miembros a la Comisión de Asuntos Sociopolíticos, compuesta por el Secretario General, el Secretario General Adjunto y los Secretarios Generales de los Sindicatos Provinciales. También elegirá al Secretario General».

h) Artículo 23, EL SECRETARIO GENERAL Y EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO.

i) Disposiciones finales transitorias, SEGUNDA.

«Tanto el régimen disciplinario como las incompatibilidades estarán contempladas en el Reglamento interno que el Consejo Sindical elabore para toda la Federación».

SEGUNDO.—Que dichos Artículos fueron impugnados ante esta Comisión de Garantías Confederal, por la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal de CC.OO. del Campo, mediante escrito fechado el 21-9-1983, por entender que los mismos contravenían los Estatutos de la Confederación.

CONSIDERANDO.—Que de la simple lectura de los Estatutos de la Confederación y de los actualmente impugnados se llega a las siguientes conclusiones:

a) El apartado segundo del Artículo 2.º de los Estatutos de la Federación Andaluza del Campo se opone frontalmente a los Estatutos de la Confederación, en tanto en cuanto el apartado 6.º del Artículo 14 de dichos Estatutos exige que: «Las Federaciones estatales, Confederaciones de nacionalidad y Uniones Regionales agrupadas en la Confederación... deberán adaptar sus Estatutos a lo que establezcan los Estatutos Confederales, en aquellos aspectos que puedan ser contradictorios», siendo absolutamente inaceptable la negociación, porque en

caso contrario la normativa interna de la Confederación parecería un reino de taifas, dependiendo de las mayores o menores presiones en cada caso, generando discriminaciones e inseguridad para todos los órganos y afiliados.

b) En cuanto al Artículo 6.º de los Estatutos impugnándose entendemos que vulnera el artículo 11 de los Estatutos de la Confederación, en tanto que en los mismos se contempla la existencia de una Federación de Pensionistas y Jubilados, con independencia de su rama de origen, con la que no existen relaciones objetivas.

c) El Artículo 11, a) inciso final, vulnera el Artículo 7, b, 2 y 3, de los Estatutos de la Confederación, en tanto en cuanto las listas deberán ser en todo caso cerradas y sólo se admitirán aquellas que estén apoyadas por el 10% de los delegados presentes, siendo la razón de dicha norma primar la existencia de listas unitarias, lo que obviamente no se obtiene por el sistema aprobado por la Federación Andaluza del Campo.

d) En cuanto al Artículo 17, d) entendemos que no cabe la creación de órganos específicos a ninguna Federación, por contravenir lo previsto en los Artículos 17 y 21 de los Estatutos Confederales, que garantizan la unidad organizativa, lo que no impide que la Federación Andaluza del Campo proponga la Secretaría Adjunta al tercer Congreso Confederal, que, si lo admitiera, tendría plena validez. No obstante, y hasta que se produzca dicha aprobación, dicho cargo es antiestatutario.

e) En cuanto al Artículo 18, apartado 5.º valen las consideraciones anteriores.

Respecto al apartado 10 del artículo 18, es evidente que la aprobación de corrientes sindicales internas compete exclusivamente al Congreso Confederal, por imperativo del artículo 7, d) de los Estatutos de la Confederación, por idénticas razones a las que nos referimos más arriba al comenzar el apartado a), dado que en caso contrario el Sindicato se vería minado de corrientes sindicales incontroladas, dependiendo de correlaciones de fuerza coyunturales y no como expresión profunda y generalizada, lo que bloquearía, sin duda, la necesaria unidad de acción.

f) Respecto a la creación de órganos en el Consejo Sindical del Campo: Presidente; dos Vicepresidentes; y dos Secretarios, contemplados en el artículo 19, párrafo último, nos remitimos a lo manifestado en el apartado d).

g) Idéntica decisión respecto al apartado último del artículo anterior.

h) Idéntica decisión respecto al Secretario General Adjunto.

i) En relación con la Disposición Final Transitoria (SEGUNDA) subrayamos que tanto el régimen disciplinario como las incompatibilidades están recogidos por los Estatutos de la Confederación en sus artículos 9 y 22, respectivamente, y a ellos hay que atenerse a todos los efectos, sin que el Reglamento interno, que en su momento apruebe el Consejo Sindical del Campo, pueda contravenir en modo alguno.

CONSIDERANDO.—Que esta Comisión de Garantías quiere resaltar que nuestra oposición a cualquier vulneración de los Estatutos de la Confederación no obedece a criterios ordenancistas o burocráticos, sino a la convicción profunda de que los Estatutos son la máxima expresión de la eficacia y de la democracia interna de la Confederación y por tanto deben ser respetados por todos, con idénticos derechos y obligaciones para todos, si bien es cierto que los Estatutos son perceptibles y por tanto modificables, pero sólo en el marco congresual de la Confederación, porque en caso contrario, la vida interna del Sindicato estaría sometida a un fárrago legislativo que liquidaría su eficacia como instrumento de clase.

VISTOS.—Los Estatutos de la Confederación y el Reglamento Interno de la Comisión de Garantías Confederal.

FALLAMOS.—Que estimando como estimamos el recurso interpuesto por la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal de CC.OO. del Campo, contra determinados artículos aprobados en los Estatutos de la Federación Andaluza del Campo de CC.OO., anulamos los artículos 2, 6, en lo relativo a pensionistas y jubilados; 11 apartado a) último párrafo; 17, d), 18, 5 y 10; 19 último párrafo en los que se refiere a los cargos allí señalados; 20 último párrafo; 23, en los que se refiere al Secretario General Adjunto y Disposición Final Transitoria SEGUNDA, si bien la Federación Andaluza del Campo de CC.OO. puede llevar al Congreso Confederal cualesquiera iniciativa de las anteriormente contempladas, que de ser aprobadas por éste adquirirían plena validez.

Mientras tanto son de aplicación en estos temas los Estatutos de la Confederación vulnerados por la citada Federación Andaluza de CC.OO. del Campo.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN NO CABE RECURSO ALGUNO.

Madrid, 10 de octubre de 1983

Por la Comisión de Garantías Confederal

Ricardo Bodas. Secretario
Carlos Elvira. Presidente

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS CONFEDERAL DE CC.OO. EN RELACIÓN CON LA EXPULSIÓN DE LUIS IBÁÑEZ SANTAMARÍA POR LA UNIÓN DE SINDICATOS PROVINCIALES DE CC.OO. DE BURGOS

RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA:

1.º.—Con fecha 30-6-1982, Luis Ibáñez Santamaría, hasta el momento asesor de la Unión Provincial de Burgos, saldó por ciento cincuenta mil pesetas su relación como asesor de la misma.

2.º.—Con fecha 14-7-1982, Luis Ibáñez Santamaría planteó papeleta de conciliación ante el IMAC reclamando 849.923 pesetas a CC.OO. en concepto de diferencias salariales.

3.º.—Con fecha 24-7-1982, se produce una nueva conciliación entre CC.OO. de Burgos y Luis Ibáñez Santamaría, en la que se acuerda de una parte que Ibáñez Santamaría retira su papeleta de conciliación y CC.OO. no emprenderá acción legal ante los Tribunales de Justicia contra Ibáñez Santamaría.

4.º.—Con fecha 16-7-1982 se abre expediente disciplinario contra Ibáñez Santamaría, cuyos cargos se dan por reproducidos. (N.º 1).

5.º.—Con fecha 30-7-1982 se da por concluso el expediente con decisión de expulsar a Luis Ibáñez Santamaría de la Confederación.

6.º.—Con fecha 4-8-1982, Luis Ibáñez Santamaría recurre su expulsión ante la Unión Regional de CC.OO. de Castilla-León.

7.º.—Con fecha 18-9-1982, la Comisión Ejecutiva Regional dictó Resolución en la que sin declarar hechos probados, reduce la sanción de expulsión a seis meses de suspensión de militancia. Asimismo, se decide sancionar con amonestación a la Unión Provincial de Burgos por la forma y métodos empleados en el expediente, así como por falta de control en la asesoría.

8.º.—Dicha Resolución fue recurrida por la Unión Provincial de Burgos, ante la Comisión de Garantías Regional, que desestimó el recurso confirmando la antedicha Resolución de la Comisión Ejecutiva Regional.

9.º.—Que con fecha 9-6-1983, la Unión Provincial de Burgos recurrió ante esta Comisión de Garantías Confederal.

10.º.—Con fecha 24 de septiembre de 1983, esta Comisión de Garantías convocó audiencia pública en Burgos, asistiendo la Unión Provincial de Burgos e Ibáñez Santamaría, no presentándose la Unión Regional de Castilla-León, pese a estar citada en debida forma.

11.º.—De las pruebas practicadas, tanto documentales como testificales, han quedado acreditados, sin lugar a dudas, los siguientes cargos:

A) Que Luis Ibáñez Santamaría tiene en su poder más de 100.000 pesetas que corresponden a la cuenta corriente abierta por él, para el cobro de minutas sin autorización alguna.

B) Que Luis Ibáñez Santamaría sacó de la asesoría de CC.OO. un determinado número de expedientes sin autorización ni control por parte del Sindicato, alegando que tenía poder notarial para el cobro.

C) Que de dichos expedientes, Luis Ibáñez Santamaría ha retenido cuando menos 107.000 pesetas en concepto de minutas cobradas por él en la tramitación de expedientes ante el Fondo de Garantía Salarial, por pertenecer a CC.OO.

12.—Que Luis Ibáñez Santamaría no ha cumplido la sanción de suspensión de seis meses, dado que inmediatamente empezó a trabajar en la Unión Provincial de CC.OO. de Soria, como asesor.

CONSIDERANDO.—Que de los múltiples cargos imputados a Ibáñez Santamaría esta Comisión de Garantías ha resuelto declarar probados exclusivamente aquellos cuya certeza no deja lugar a dudas a la luz de la prueba practicada, en la que se ha procurado evitar cualquier indefensión para el compañero afectado, hasta el punto de ofrecerle después de terminada la audiencia pública el 24-9-1983, pese a que todos los miembros de la Comisión nos encontrábamos desplazados en Burgos, que estábamos dispuestos a esperar cualquier prueba que considerara oportuna e incluso suspender la fecha para dictar Resolución, esperando que se aportaran nuevos documentos o testigos, lo que no ha sucedido, porque Ibáñez Santamaría se ha limitado a enviarnos una carta diciendo que nos recuerda los expedientes que tramitó en su momento. (N.º 2).

CONSIDERANDO.—Que esta Comisión quiere valorar detenidamente los hechos declarados probados, para determinar con claridad las causas de nuestra convicción:

A) El propio Ibáñez Santamaría en su recurso ante la Comisión Ejecutiva Regional de Castilla-León, declara que el 24-7-1982, se llegó a un acuerdo en el que liquidó con CC.OO. por 150.000 pesetas de una parte, más 100.000 aproximadamente existentes en el Banco, lo que no puede admitirse en modo alguno, puesto que la simple lectura del documento de 24-7-1982, demuestra que allí no se habló para nada de dinero, excepto para subrayar que las reclamaciones de Ibáñez contra CC.OO. carecían de fundamento y por CC.OO. se abstendría de reclamar judicialmente contra Ibáñez Santamaría.

De otra parte, existe un documento de 30-6-1982, en el que Ibáñez y CC.OO. saldaban sus cuentas y aunque Ibáñez negó la autenticidad de su firma, es evidente que reconoció su firma en el citado documento de 24-7-1982 y es absurdo que se firmara un documento de ese calibre, sin hacer constar en modo alguno la entrega de las cantidades que Ibáñez alega se pactaran dicho día.

En consecuencia, nos parece incuestionable que Ibáñez tiene en su poder más de 100.000 pesetas que pertenecen a CC.OO., no habiendo acreditado en modo alguno que se le hubieran entregado voluntariamente.

B) Asimismo, el propio Ibáñez reconoció en Audiencia ante esta Comisión que se llevó todos los expedientes, en los que estaba apoderado notarialmente para actuar ante el Fondo de Garantía Salarial, habiéndose acreditado que dicha salida no fue autorizada ni controlada por la dirección del Sindicato, lo que es totalmente injustificable, porque los expedientes podían haber quedado en custodia del Sindicato, pudiendo cobrar Ibáñez cuando estuvieran el pago.

c) Por último, ha quedado acreditado, que Ibáñez ha cobrado un número de minutas de las que sólo ha entregado al Sindicato la cantidad de 197.307 pesetas faltando cuando menos 107.000 que no han sido justificadas.

Dicha situación ha sido acreditada por esta Comisión, que ha comprobado uno a uno dichos expedientes, constando en el procedimiento los cobros ante el Fondo de Garantía Salarial y la retención de minutas.

CONSIDERANDO.—Que de los hechos declarados probados, se acredita una manifiesta vulneración de los artículos 8 y 9 de los Estatutos de la Confederación, que por imperativo de los mismos, sólo procede ser sancionado con la inmediata expulsión.

CONSIDERANDO.—Que en este expediente se ha producido una notoria anomalía, en tanto en cuanto la Comisión Ejecutiva Regional de Castilla-León, en idéntico expediente al que hoy nos afecta, sancionó con amonestación a la Unión Provincial de Burgos, desconociendo por completo el procedimiento sancionador previsto en nuestros Estatutos, lo que no es admisible,

con independencia del fondo o las razones que puedan existir en su posición, porque los Estatutos obligan a todos, incluida a la Comisión Ejecutiva Regional de Castilla-León.

A mayor abundamiento, hay que resaltar que dicha Comisión Ejecutiva Regional decidió suspender por seis meses de militancia a Ibáñez Santamaría, sin declarar hechos probados, ni justificar tal medida, lo que no es admisible, puesto que el artículo 9 c) de los Estatutos no deja lugar a dudas respecto a la sanción en caso de malversación y si la hubo, debió ser expulsado y si no la hubo, en opinión de la Ejecutiva Regional, la suspensión de seis meses carecía de causa.

Por último, destacar que la Comisión Ejecutiva de Castilla-León actuó contra sus propios actos, dado que después de suspender en seis meses a Ibáñez Santamaría, le proporcionó trabajo en la Unión Provincial de Soria, lo que no es admisible en modo alguno, porque vacía de contenido el marco estatutario de la Confederación.

VISTOS.—Los Estatutos de la Confederación y el Reglamento Interno de esta Comisión, excepto el plazo para dictar Resolución.

RESOLVEMOS.—Que estimando como estimamos el recurso interpuesto por la Unión Provincial de Burgos de CC.OO anulamos a todos los efectos la Resolución de 18-9-1982, de la Comisión Ejecutiva Regional de Castilla-León, ratificada por la Comisión de Garantías Regional y en consecuencia ratificamos la expulsión de la Confederación Sindical de CC.OO. de Luis Ibáñez Santamaría, dejando sin efecto la amonestación verbal que afectaba a la Unión Provincial de Burgos.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN NO CABE RECURSO ALGUNO.

Madrid, 11 de octubre de 1983

Por la Comisión de Garantías Confederal

Ricardo Bodas. Secretario
Carlos Elvira. Presidente

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS CONFEDERAL SOBRE RECURSO INTERPUESTO POR LA FEDERACIÓ DE CATALUNYA DE BANCA I ESTALVI

RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA:

PRIMERO.—Que en el Artículo 20, Apartado 7.º de los vigentes Estatutos de la FEBA, se dice textualmente:

«Son funciones del Consejo Federal de la FEBA: Aprobar la variación de la cuota».

SEGUNDO.—Que con fecha 24-4-1982, el Consejo Federal de la FEBA aprobó aumentar la cuota en ocho pesetas para los sindicatos que contaran con más de 100 afiliados, siendo esta sobrecuota computable a efectos congresuales.

TERCERO.—Que con fecha 2-7-1982, la Comisión Ejecutiva de la FEBA aprobó lo siguiente:

«Se acordó aceptar la resolución tomada por Organización en el viaje a Cataluña en cuanto a la imposibilidad de pago de estos porcentajes, llegándose al acuerdo de conceder a la Federación de Cataluña la ayuda solicitada y en enero, con los atrasos regularizados, volver a discutir».

CUARTO.—Que con fecha 12-9-1983, el Consejo Federal de la FEBA aprobó lo siguiente:

«Ante la propuesta de Cataluña de que no aparecieran como deudores en el Balance por no pagar la sobrecuota de 8 pesetas desde enero, se vio que se tenía que mantener una reunión con Cataluña y ver si había sido posible o no el pago desde enero (ver acuerdo Ejecutiva) y tomar posterior decisión, en cuanto a la viabilidad o no. Si no fuera posible se tendría que estudiar el tanto por ciento a cubrir».

QUINTO.—Que asimismo, en su reunión del Consejo de fecha 4-10-1983 se aprobó lo siguiente:

«Votación: Mantener el número de componentes de la delegación de Cataluña; 12 votos en contra, 26 a favor y 2 abstenciones».

SEXTO.—Que en el Artículo 18, c, 5 de los Estatutos Confederales se dice lo siguiente:

«Serán funciones del Consejo Confederal: Fijar el sistema de cuotas de la Confederación».

SÉPTIMO.—Que no obstante lo antedicho, el Consejo Confederal no ha fijado un criterio específico de fijación de cuotas.

OCTAVO.—Que en el II Congreso Confederal de CC.OO. se aprobó lo siguiente:

«A partir de la celebración del II Congreso la cuota de los afiliados a la C.S. de CC.OO. será proporcional a los salarios Convenio, estableciéndose, no obstante, la cantidad de 200 pesetas como valor mínimo, potenciándose el cobro por nómina, como paso previo a la mecanización... (Ver ponencia de finanzas aprobada en el II Congreso Confederal, página 30).

NOVENO.—Que es público y notorio que no existe uniformidad en la cuota en los diferentes sindicatos.

CONSIDERANDO.—Que el presupuesto de la presente reclamación se centra en determinar la legalidad o ilegalidad de los Estatutos de la FBA, que posibilitan la variación de la cuota, es opinión unánime de esta Comisión de Garantías que el apartado 7.º del Artículo 20 de la FEBA no contradice los Estatutos de la Confederación, en tanto en cuanto el II Congreso de la misma ha mandatado claramente la determinación proporcional de la cuota, si bien fijando la cuantía de 200 pesetas como cuota mínima y es evidente que ningún órgano, mejor informado y legitimado como las propias Federaciones de rama para avanzar hacia el óptimo de la cuota

proporcional, según los diferentes Convenios. Lo antedicho no contradice en modo alguno lo previsto en el artículo 18/b, 5 de los Estatutos Confederales que textualmente dice: «fijar el sistema de cuotas» expresión que objetivamente pretende la búsqueda de criterios generales respecto a la cuota, lo que cuadra plenamente con lo aprobado en el 2.º Consejo Confederal sobre las cuotas y prueba de ello es que el Consejo no ha fijado criterios concretos sobre el tema, mientras que diferentes órganos territoriales o de rama han fijado sus propias cuotas teniendo en cuenta sus peculiaridades.

En consecuencia, esta Comisión de Garantías ratifica la legalidad del apartado 7.º del artículo 20 de los Estatutos de la FEBA y las decisiones de los Consejos Federales de la misma sobre el tema.

CONSIDERANDO.—Que el artículo 17/ a, de los Estatutos Confederales establecen expresamente que la representación a los Congresos se determinará en proporción al número de cotizantes, es evidente que el sindicato que no abonara las cuotas fijadas estatutariamente, no podrían en interpretación rígida de la norma citada asistir al Congreso. En consecuencia, la decisión del Consejo de la FEBA, de adecuar la presencia de los delegados de la Federación de Catalunya, en función de la cuota realmente pagada, parece una decisión evidentemente más equilibrada que la interpretación expuesta en el párrafo anterior y que no vulnera los Estatutos puesto que no basta tener un determinado número de afiliados, sino que es preciso que dichos afiliados coticen la cuota fijada estatutariamente.

CONSIDERANDO.—Que el hecho de estar en desacuerdo con una decisión democráticamente adoptada por el órgano competente, por considerarla ilegal, en ningún caso faculta para su incumplimiento, sino que conforme a lo previsto en el artículo 8.º de los Estatutos Confederales es obligatorio cumplir con la decisión y posteriormente impugnarla por los cauces oportunos dado que en caso contrario el sindicato, en tanto que organización obrera, en la que la unidad de acción es objetivo determinante, carecería de sentido, y es notorio que en su momento no se recurrió las decisiones supuestamente ilegales.

VISTOS.—Los Estatutos de la Confederación y demás disposiciones,

RESOLVEMOS.—Que debemos desestimar en todos sus términos el recurso interpuesto por la FBIE de Cataluña.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN NO CABE RECURSO ALGUNO.

Madrid, 16 de diciembre de 1983

Por la Comisión de Garantías Confederal

Carlos Elvira. Presidente

COMISIÓN DE GARANTÍAS CONFEDERAL SOBRE SANCIÓN AL COMPAÑERO MANUEL NAVARRO DELGADO POR EL SINDICATO PROVINCIAL DE CÓRDOBA (ALIMENTACIÓN)

RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA.

PRIMERO.—Que Manuel Navarro Delgado es miembro de la Comisión Ejecutiva del Sindicato Provincial de Córdoba, responsable de Finanzas de la Federación Regional de Andalucía (Alimentación COAN) y de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal de Alimentación.

SEGUNDO.—Que con fecha 19-7-1983, se recibe en la Confederación COAN, y Federación Regional de Alimentación un escrito anónimo, que implica al compañero Manuel Castillejo en un supuesto fraude contra su empresa.

TERCERO.—Que en el citado anónimo aparece un talón fotocopiado perteneciente a la cuenta del compañero Manuel Navarro en la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba.

CUARTO.—Que con fecha 12-5-1983, la Comisión Gestora del Sindicato Provincial de Alimentación de Córdoba, con asistencia de cinco miembros, decide apartar al compañero Manuel Navarro Delgado de toda función de responsabilidad, sin que conste la presencia de dicho compañero en la reunión, debido a las posturas del compañero respecto al Sindicato.

QUINTO.—Con fecha 4-8-1983, la Comisión Ejecutiva del Sindicato de Alimentación suspende al compañero Manuel Navarro en sus cargos durante un año, con presencia de 8 de sus miembros, sin que conste la presencia del sancionado.

SEXTO.—Con fecha 8-10-1983, el Consejo Federal de Alimentación confirma dicha sanción, sin que conste audiencia del afectado.

CONSIDERANDO.—Que de la simple lectura del Artículo 9 de los Estatutos de la Confederación se acredita que no se han cumplido los requisitos previstos para la sanción estatutaria, en tanto en cuanto no se ha tramitado el expediente ante el órgano en que milita el afectado, que en este caso debe ser el superior, es decir la Comisión Ejecutiva de la Federación de Alimentación y, en todo caso, el órgano sancionador (Consejo Federal de Alimentación), no ha dado la preceptiva audiencia al interesado, lo que necesariamente le ha generado indefensión.

CONSIDERANDO.—Que pese a los reiterados escritos producidos por esta Comisión de Garantías Confederal, los órganos responsables de la Federación de Alimentación no han puesto a nuestra disposición las pruebas necesarias que acrediten de forma indudable que el sancionado fue el autor del anónimo, porque la fotografía de su talón puede generar una presunción de autoría, pero en ningún caso prueba definitiva, que es absolutamente obligatoria para una sanción, que afecta a un dirigente del Sindicato.

CONSIDERANDO.—Que en los Estatutos de la Confederación no se contempla la sanción de un año de suspensión de cargos.

VISTOS.—Los Estatutos de la Confederación, excepto los plazos para dictar resolución.

RESOLVEMOS, que estimamos el recurso interpuesto por Manuel Navarro Delgado, declaramos nula y sin efecto la sanción impuesta.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN NO CABE RECURSO ALGUNO.

Madrid, 17 de febrero de 1984

Por la Comisión de Garantías Confederal

Carlos Elvira. Presidente

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS CONFEDERAL SOBRE IMPUGNACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE CATALUÑA CONTRA EL III CONGRESO DE LA FEDERACIÓN ESTATAL DE COMERCIO

RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA:

PRIMERO.—Que con fecha 30-10-1983, se celebró el III Congreso de la Federación Estatal de Comercio de CC.OO.

SEGUNDO.—Que la fecha límite para presentación de enmiendas fue el 15-10-1983.

TERCERO.—Que dicha fecha se amplió hasta el 25 del mismo mes.

CUARTO.—Que se enviaron a todas las organizaciones las ponencias en los plazos previstos.

QUINTO.—Que las enmiendas, cuya fecha de entrada no consta en esta Comisión, se entregaron en el mismo Congreso.

SEXTO.—Que el Congreso fue suspendido, porque el Secretario General propuesto no admitía el cargo sin un equipo coherente con sus posiciones.

SÉPTIMO.—Que desde la suspensión del Congreso hasta su finalización se hizo cargo la mesa del mismo, con su Presidente al frente, si bien se constituyó una Comisión para hacer frente a los asuntos de trámite de la Federación.

OCTAVO.—Que con fecha 27-11-1983 se culminó el Congreso con absoluta normalidad.

NOVENO.—Que los hoy impugnantes hicieron la siguiente valoración del Congreso con fecha 9-11-1983:

«Los delegados de la Federación de Comercio de Catalunya asistentes al III Congreso de la Federación Estatal de Comercio, valoran positivamente el Congreso y su desarrollo, hasta el momento de la elección de candidaturas, todo ello a pesar de las deficiencias habidas en el debate precongresual y a la tardanza en remitir los documentos, basamos esta valoración en las siguientes consideraciones:

a) Se ha realizado un profundo debate sindical en el seno del Congreso, con documentos alternativos, que han obligado a los delegados a realizar un análisis exhaustivo de la realidad sindical española y del Comercio en concreto.

b) Por el avance en la madurez de algunos delegados que hasta este momento no habían tenido la oportunidad de participar en un debate sindical profundo.

c) Por el avance obtenido por la representación que defendía la política sindical de resistencia a la crisis y solidaridad de clase.

Barcelona, 9 de noviembre de 1983».

CONSIDERANDO.—Que la Comisión de Garantías Confederal es un órgano competente para entender de cualquier reclamación sobre afección de los Estatutos Confederales, interpuesto por miembros u órganos de la Confederación, nos vemos obligados a entrar en la reclamación planteada, no sin antes manifestar que el uso injustificado de las Instituciones desgasta innecesariamente a los órganos y a su credibilidad.

Dicho esto, manifestamos que los hechos probados acreditan que no se han vulnerado en modo alguno los Estatutos de la Confederación, en tanto en cuanto los demandantes no han acreditado que sus impugnaciones fueran bloqueadas y no enviadas a los afiliados con mala fe, lo que excluye cualquier tipo de responsabilidad.

Asimismo, los demandantes no han probado que se constituyera una Comisión Gestora.

Más sorprendente, si cabe, es la actitud de estos compañeros que en su propio escrito a los afiliados reconocen la validez del Congreso lo que colisiona frontalmente con la impugnación.

VISTOS.—Los Estatutos de la Confederación.

RESOLVEMOS desestimar en todos sus términos el escrito de impugnación de la Federación de CC.OO. de Cataluña de Comercio contra el III Congreso de la Federación de CC.OO. de Comercio Estatal.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN NO CABE RECURSO ALGUNO.

Madrid, 17 de febrero de 1984

Por la Comisión de Garantías Confederal

Carlos Elvira. Presidente

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS CONFEDERAL EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR DIVERSAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CC.OO. DEL PAÍS VALENCIÁ

RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA:

PRIMERO.—Que con fecha 24-4-1984 han entrado en la Comisión de Garantías Confederal cuatro reclamaciones: de la Unión Comarcal de l'Horta; Sindicato Comarcal del Metal; Federación del Campo de CC.OO. del País Valenciá; de Alberto García Esteve y 12 miembros más del Consejo Confederal de CC.OO. del País Valenciá, contra las normas generales que regulan el período congresual para la elección de delegados al III Congreso Confederal de la C. S. de CC.OO. y a los Congresos previos, que reproducen idéntico texto.

SEGUNDO.—Que las impugnaciones antedichas afectan exclusivamente a la Confederación Sindical de CC.OO. del País Valenciá.

CONSIDERANDO.—Que en tesis consolidada de esta Comisión de Garantías desarrollada en múltiples resoluciones anteriores, que las reclamaciones contra actuaciones o acuerdos de otros miembros y órganos de la Confederación deben ser conocidas y resueltas en primer término por las Comisiones de Garantías del ámbito correspondiente y siendo notoria la existencia de Comisión de Garantías en el País Valenciano, corresponde a la misma conocer con carácter previo de las impugnaciones citadas, sin perjuicio de que una vez resueltas por este organismo, podrá recurrirse ante esta Comisión de Garantías.

VISTOS, los Estatutos de la C. S. de CC.OO. y los Estatutos de la C. S. de CC.OO. del País Valenciá,

FALLAMOS que, examinadas de oficio las reclamaciones planteadas, nos inhibimos en beneficio de la C. de G. del P. V., sin entrar en el fondo de las reclamaciones planteadas.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN NO CABE RECURSO ALGUNO.

Madrid, 4 de mayo de 1984

Por la Comisión de Garantías Confederal

Carlos Elvira. Presidente

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS CONFEDERAL EN RELACIÓN CON LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE TRANSPORTE AÉREO DE MADRID

RESULTANDO PROBADO:

PRIMERO.—Que con fecha 25-10-1983, se reunieron en Madrid, convocados por la Comisión Ejecutiva Provincial del Transporte Aéreo los que fueron en su día delegados al Congreso Constituyente del Sindicato de Transporte Aéreo de la Comunidad Autónoma de Madrid.

SEGUNDO.—Que en dicha reunión se decidió constituirse en Asamblea «Precongresual», para el III Congreso del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid.

TERCERO.—Que dicha decisión fue impugnada por varios delegados presentes.

CUARTO.—Que con fecha 28-10-1983, se convocó por el Secretario General de la Federación de Transporte la Comisión de Garantías de la Federación de Transporte con el orden del día que se reproduce en el documento n.º 1, que se adjunta.

QUINTO.—Que en la citada fecha se dictó Resolución en los términos que se dan por reproducidos en el documento n.º 2.

SEXTO.—Que no consta en el procedimiento que fuera convocado y oído el Secretario General del Transporte Aéreo de Madrid.

SÉPTIMO.—Que con fecha 31-10-1983, entró impugnación de dicha Resolución ante esta Comisión de Garantías.

CONSIDERANDO.—Que esta Comisión de Garantías en reiteradas ocasiones ha venido declarando que contra las decisiones de miembros u órganos de la Confederación son competentes con carácter previo las Comisiones de Garantías del ámbito correspondiente y en este supuesto es evidente que la Asamblea Precongresual impugnada se produjo en el proceso congresual de la Unión Sindical de CC.OO. de la Región de Madrid y siendo notoria la existencia de Comisión de Garantías en la Unión Sindical de Madrid, compete inicialmente a dicho órgano el conocimiento de la reclamación planteada.

CONSIDERANDO.—Que esta Comisión de Garantías Confederal no puede eludir entrar a considerar que el procedimiento seguido por la Ejecutiva de la Federación de Transportes, convocando a la constitución de la Comisión de Garantías Federal, con un orden del día en el que no se preveía la denuncia tratada y sin oír a una de las partes afectadas, genera una notoria indefensión que no es admisible en un Sindicato democrático, sin perjuicio de la justeza o no de sus posiciones en cuanto al fondo del asunto.

VISTOS.—Los Estatutos de la C. S. de CC.OO y de la Federación de Transportes, excepto el tiempo para resolver,

FALLAMOS.—Que declaramos nulo todo lo actuado desde la Resolución de la C. de G. de la F. de T. y remitimos el procedimiento a la Comisión de Garantías de CC.OO. de Madrid, para que resuelva sobre la impugnación planteada previa audiencia de las partes.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN NO CABE RECURSO ALGUNO.

Madrid, 4 de mayo de 1984

Por la Comisión de Garantías Confederal

Carlos Elvira. Presidente

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS CONFEDERAL SOBRE DENUNCIA DEL COMITÉ DE EMPRESA Y VARIOS AFILIADOS DE CC.OO. DE LA EMPRESA CONFECCIONES ALMUDENA, S. A., CONTRA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS DE LA UNIÓN SINDICAL DE MADRID REGIÓN

RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA:

PRIMERO.—Que las afiliadas al Sindicato de Textil de Madrid de CC.OO. Amelia Muñoz, Marina Sánchez, Antonia Rodríguez y Gracia Barragán presentaron denuncia sobre determinadas actuaciones del Comité de Empresa a la Comisión de Garantías de USMR.

SEGUNDO.—Que después de varias reuniones y aportación de datos documentales por parte de las denunciantes y demandados la Comisión de Garantías de USMR dictó Resolución con fecha 10-5-1984, en la que resolvió textualmente:

«En principio y como primera medida, amonestar por escrito a los miembros de CC.OO. que forman parte del Comité de Empresa de Confecciones Almudena, S. A.»

TERCERO.—Que con fecha 30-5-1984, los afectados recurrieron ante esta Comisión de Garantías.

CONSIDERANDO.—Que de la simple lectura de los Estatutos en sus artículos 9 y 24, se constata que el procedimiento sancionador que afecta a cualquier afiliado al Sindicato, debe tramitarse por el órgano en que dicho afiliado se encuadre, y decidido por el órgano superior, correspondiendo a la Comisión de Garantías intervenir sobre la adecuación de dichas actuaciones a los Estatutos.

CONSIDERANDO.—Que de lo anteriormente expuesto se desprende que los denunciantes debieron dirigirse al órgano en el que militan los trabajadores demandados para que tramitara su denuncia, que en su momento debió ser decidida por el órgano superior y en ningún caso por la Comisión de Garantías de la UMR que no tiene facultad alguna para imponer directamente sanciones a ningún afiliado, siendo su exclusiva misión ratificar o anular actos y decisiones de los órganos del Sindicato en función de su adecuación a los Estatutos.

CONSIDERANDO.—Que la Comisión de Garantías de la USMR ha extralimitado sus funciones, debemos anular todo el procedimiento seguido ante la misma sin perjuicio de que por los denunciantes puedan seguir el camino previsto en los Estatutos respecto a la conducta sindical de los denunciados sobre la que esta Comisión de Garantías Confederal no se pronuncia en esta Resolución.

VISTOS.—Los Estatutos de la Confederación.

FALLAMOS.—Que sin entrar en el fondo de la denuncia planteada, anulamos todo lo actuado ante la Comisión de Garantías de la SMR por las razones expuestas advirtiéndolo a los denunciantes, si es que lo estiman oportuno que la tramitación de cualquier denuncia contra un afiliado a la Confederación se contempla en el artículo 9 de los Estatutos.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN NO CABE RECURSO ALGUNO.

Madrid, 13 de junio de 1984

Por la Comisión de Garantías Confederal

Carlos Elvira. Presidente

